



Geógrafo. Docente
en la Universidad de
Costa Rica. Facilitador
de Oilwatch
Mesoamérica.

Los otros costos de El Diquís

..... || Mauricio Álvarez ||



El Gobierno anunció recientemente que el P. H. El Diquís ya no será un proyecto nacional, aduciendo la precaria situación financiera del Instituto Costarricense de Electricidad (Ice) (*La Nación*, 29/06/2012). Después de haber invertido un 4,5% del valor total de la obra (casi \$100 millones), aprovecharon la coyuntura de crisis para desinflarle la nacionalidad al proyecto.

La decisión de restringir el endeudamiento no es nueva (huelga de trabajadores del Ice en 2003) ni tampoco la intención de entregar los megaproyectos a las empresas chinas y brasileñas, como se intentó con el P. H. Siquirres amparándose en la Ley (N.º 8660) de Fortalecimiento de Telecomunicaciones. Lo nuevo es el contexto (post TLC) en que se están dando las decisiones. En términos “prácticos” significa entregar a las trasnacionales una de las mejores tajadas del proyecto mientras al Ice le tocará la parte sucia del trabajo: lidiar con la resistencia social y los impactos ambientales de los estudios previos, la elaboración de estudios de impacto ambiental, la construcción, la gestión de todos los impactos socio-ambientales posteriores a la construcción, la consulta a las comunidades indígenas y lograr el convencimiento nacional sobre el proyecto.



Volver al índice

Están creando las condiciones favorables (miedo) para terminar de festinar los restos del sector eléctrico, que incluyen los segmentos que en el corto plazo son los que requieren más inversión (electricidad) y de lenta recuperación, pero que en el marco de exportar a la región se vuelven muy lucrativos. Para ello, políticos-empresarios siguen utilizando la estrategia de crear una crisis-miedo (la doctrina del shock, de Naomi Klein) para aprobar medidas y proyectos de privatización eléctrica en la Asamblea Legislativa. El primer intento fue revivir el fantasma de los apagones para luego tratar de vender como solución la Ley de Contingencia Eléctrica (proyecto 18.093, 10-6-2011), que pretende aumentar la producción privada de electricidad en un 25% abriendo un “mercado del gran consumidor” que entregaría a los generadores privados los grandes clientes de las ocho distribuidoras cooperativas del país. La Ley General de Electricidad (expediente 17.812) vendría a desarmar el modelo nacionalizado a favor de uno privado, de aparente libre mercado, a costa del Ice y la inversión nacional de décadas.

Al mismo tiempo, el Gobierno reactiva -sin ninguna discusión sobre la conveniencia socioeconómica- un nuevo proceso de selección de proyectos para comprar 140 megavatios (MW) a los generadores privados amparados en la polémica ley 7200 que permitió a políticos-empresarios apoderarse del 15% del mercado de electricidad con un sobreprecio con el que han venido desangrando al Ice en los últimos 20 años.

La otra acción sin mayor consenso o discusión es generalizar la exportación de electricidad a gran escala, para lo que se realizó la megainversión (\$494 millones) de interconexión eléctrica de Siepac y se habla abiertamente de la exportación como “conveniencia nacional” independientemente de quien lo haga (*Costa Rica Hoy*, 2-7-2012). En teoría, se podría recuperar más rápidamente la inversión y disminuir la tasa de retorno de los proyectos hidroeléctricos.

Subyace aún la discusión sobre cómo entregar la exportación de electricidad a los generadores privados y entregar la inversión nacional del Siepac al estilo de las telecomunicaciones sin un peaje que incluya los costos reales. Según la Asociación Sindical de Empleados Industriales de Comunicaciones y la Energía (Asdeice), son unos \$300 mil millones que el Estado obligó a perder al Ice al dejar estipulado en el Tratado de Libre Comercio los peajes de interconexión en precios a “costo base” (*La Prensa Libre*, 25-7-2012).

El ambiente y las comunidades correrán con la mayoría de los costos necesarios para la exportación de energía; mientras, las ganancias serán para las empresas trasnacionales como Endesa, socia del proyecto Siepac, y la banca multinacional. Consolidar la exportación de energía, sin una amplia discusión al respecto, ocasionaría graves impactos socioambientales y es una amenaza directa a la soberanía energética del país, pues explotaría bienes estratégicos (cuencas) para el futuro y antepondría las ganan-

cias privadas a la seguridad energética nacional futura.

Para terminar de consolidar el shock, el Gobierno y los medios de desinformación masiva están creando la sensación de crisis financiera en el Ice, comparándola con la crisis de la seguridad social, y proponiendo medidas de contingencia como el aumento de la exportación de electricidad y recortes que implican movilidad laboral (*La Nación*, 11-07-2012).

En el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís el Ice ha realizado los llamados “estudios previos” en los últimos años, en los que se ha venido gestionando el proyecto. Se trata, en realidad, de proyectos previos como: apertura de caminos y arreglo de caminos (Térraba), concesiones de agua en Ceibo (expediente D1-1125-2010, Setena), estudios geológicos (expediente 366-2005, Setena), almacenes (expediente D1791-2009, Setena), campamentos (expedientes D1-1182-2007, D1-950-2009, Setena), oficinas (expediente D2-0725-2007, Setena), construcción de torres de alta tensión (diferente a la Siepac), túneles, extracción de materiales, desvío de quebradas y dragados, etc. Lo mismo que los impactos del Siepac: los 489 kilómetros de líneas, carreteras de acceso y un área de servidumbre de 30 metros donde se cortan árboles y se construyen las torres eléctricas de alta tensión. Estas distintas acciones y proyectos en ejecución no serán valoradas en un mismo instrumento de evaluación ambiental integral.



Asociación de Iniciativas Populares Ditsö. Caminata “La dignidad camina desde el sur” desde Térraba a Buenos Aires, Costa Rica

El megaproyecto, ya segmentado en pequeñas o medianas obras en distintos momentos, oculta el impacto real de la obra total y dificulta el cálculo de una relación costos-beneficios. Por ejemplo, el reasentamiento de más de 1 500 personas es, en la práctica, hacer un distrito nuevo en Buenos Aires con sus respectivas actividades económicas, servicios e impactos en las áreas de reasentamiento. Eso sin contar las 11 comunidades que viven del humedal Térraba-Sierpe: ¿a qué actividad y adónde serán trasladados? Ambientalmente, ¿qué implicación tendrá ese desplazamiento?, ¿qué pasará con los otros usos de la cuenca abajo del proyecto, los canales de riego de Palmar Sur, o con la pesca o el significado histórico y cultural asociado al río?, ¿cómo fijar un precio a estas pérdidas?

Hay que incluir en el impacto global de la obra la serie de tajos (cuatro quebradores según el Ice) o concesiones de material de río necesario para la construcción

de la represa, de caminos de acceso, campamentos y casas para 3 500 empleados. Cada una de esas actividades tendrá a su vez impactos ambientales que serán individualizados o invisibilizados en la ponderación total de la obra.

La misma Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) autorizó segmentar el estudio de impacto ambiental y revisarlo parcialmente (resolución 1526-200 Setena, 6-7-2009). Entonces, ¿cómo podremos tener una idea del costo-beneficio del proyecto y del impacto integral?, ¿con cuáles partes del estudio de impacto o en qué momento se harán las audiencias públicas o la consulta a las comunidades indígenas?

El primer estudio de impacto ambiental para el proyecto Boruca, realizado en 1975 por J. Tossi y F. Zadroga, determinó un impacto inevitable e irreversible sobre el humedal por las “alteraciones muy desfavorables en la ecología del delta en el río Grande de Térraba y mar vecino, en especial la pérdida de los efectos positivos de la sedimentación fluvial, la posible invasión por aguas saladas de la zona de cultivos, la pérdida de la productividad vegetal y animal de los manglares, esteros y mar vecino”. Este no es simplemente un dato histórico. Según el Ice, la represa en construcción retendrá el 70% de los sedimentos (unos 3,5 millones de TM, en 20 años de funcionamiento serán unos 700 millones de TM) que en la actualidad arrastra el río Grande de Térraba al humedal, lo que provocará sin duda cambios drásticos en la costa y, posiblemente, la desaparición del humedal. ¿Qué sucederá

entonces con los beneficios y los servicios ambientales provistos actualmente por el humedal Térraba-Sierpe, que la organización Earth Economics valoró en entre \$250 millones y \$2 500 millones, según diferentes variables? (*Semanario Universidad*, 10-11-09).

¿Qué impacto tendrá sobre el proyecto el deterioro de la cuenca ocasionado por las 10 000 hectáreas de piña, el cultivo extensivo de caña y demás actividades agrícolas? Ese impacto acumulado por años, ¿cuánta vida útil le quitará al embalse?

A lo anterior sumémosle que no hay plan de manejo de cuenca y el Ice lo elaborará posteriormente a la construcción ya en función de un uso eléctrico. Estamos hablando de la inversión más grande (\$2 000 a \$2 500 millones) en toda la historia del estado costarricense (30% de nuestra deuda externa) como para dejar el manejo para después de construido.

Con el embalse de El Diquís se inundarían 2 000 hectáreas de bosques: unas 10 veces el impacto de la mina en Crucitas. Ese bosque muerto y la materia orgánica que llegue por arrastre al embalse (descomposición) liberarán a la atmósfera dióxido de carbono y metano. Con la pérdida de cobertura del humedal, ¿cuánto CO₂ se dejaría de fijar y cuánto será liberado al inundar la costa?

Según Iván Lima y sus colegas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el embalse de las grandes represas contribuye al menos con el 4% del total del calentamiento global. Además, las represas son la principal fuente antropogénica de metano, gas de

efecto invernadero 25 veces más potente que el CO₂. Actualmente, los humedales son importantes sumideros de carbono, alrededor del 40% del carbono terrestre de todo el mundo.

Un estudio de Ríos Internacionales (www.internationalrivers.org) que compara a las plantas hidroeléctricas, en particular las tropicales, con otras fuentes de generación de energía llega a la conclusión de que el impacto ambiental de las represas con grandes embalses es mayor incluso que el provocado por las plantas más sucias de combustible fósil. El estudio asegura que “el promedio neto de las emisiones de los embalses tropicales supera en el doble al de las centrales convencionales de carbón”.

A estos estudios se suma el hecho de que el cambio climático está produciendo incrementos y reducciones de escorrentía que deberán ser cuantificados para evaluar la factibilidad de la megaconstrucción. Estos extremos climáticos implicarán mayor sedimentación de los embalses, al incrementarse el arrastre de sedimentos, lo que reduciría la vida útil del proyecto.

Construir El Diquís es crear el precedente para abrir definitivamente los “territorios indígenas” a la expansión energética. Se tienen 18 proyectos de generación Ice ubicados parcial o totalmente dentro de reservas indígenas, la mayoría de ellos en etapas de identificación y estudios preliminares. Estos proyectos representan, con respecto a la capacidad hidroeléctrica futura total, aproximadamente un 30% tanto en términos de potencia como en energía.

Comprar la viabilidad social a punta de obras, empleos, promesas y patrocinios ha sido la estrategia de las transnacionales al estilo Crucitas. El Ice no ha variado mucho esta estrategia y se ha dado a la tarea de “convencer” a un alto costo a los habitantes de la zona y del país en general.

La gestión socio-ambiental implica algo más que “servicio al cliente” y que los dogmas del “cliente tiene la razón” que ahora repite automáticamente el Ice como si fuera una multinacional. Las transnacionales, después de años de estar lucrando, explotando a los seres humanos y al ambiente, hoy tratan de lavar su imagen con la tal “responsabilidad social corporativa”. En la práctica, es lo que está tratando de hacer el Gobierno al “comprar” apoyo popular con obras públicas y otros beneficios que debieron hacerse porque son necesarios y no solo porque media la construcción de una represa.

Los políticos empresarios están llevando al Ice a un escenario de alto riesgo para su supervivencia. Están poniendo todos los huevos en la misma canasta y se aprestan a patearla. El proyecto El Diquís va a ser el precedente para abrir las comunidades indígenas a la generación eléctrica y lograr abrir la inversión de transnacionales en la construcción de otros polémicos proyectos como Pacuare o Savegre. Con esta energía aparentemente “barata” se tendrán muchos impactos y costos acumulados, invisibilizados y transferidos al ecosistema y a las futuras generaciones.